

¿SE ROMPIÓ LA TREGUA? LA MASACRE DE EL BOSQUE

**GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 17 DE JUNIO DE 1998**

Dos días después de la desaparición de la Conai, el 10 de junio el gobierno de Albores Guillén somete al municipio autónomo de San Juan de la Libertad ubicado en el municipio El Bosque. Con la justificación legal de ejecutar 16 órdenes de aprehensión, mil 200 efectivos en un operativo policiaco-militar con más de 40 vehículos artillados, realizan un operativo en tres poblados zapatistas. La acción tuvo como resultado la imposición de las autoridades priístas en la cabecera municipal y la presencia de las fuerzas policiacas, alrededor de 60 campesinos presos, varios heridos, desaparecidos y mujeres, niños y ancianos desplazados en la montaña. El Ejército y las fuerzas policiacas nuevamente saquearon casas, templos y escuelas; se comieron animales, robaron tiendas cooperativas, dinero, pertenencias y documentos escolares. Se suspendieron las actividades escolares y algunos maestros fueron llevados a la cárcel.

El antecedente inmediato fue el supuesto enfrentamiento y emboscada a unos indígenas priístas de la comunidad de “Los Plátanos”. Sin embargo, en toda la región es conocida la comunidad por sus antecedentes con problemas de droga, comunidad cien por ciento priísta y donde ningún zapatista entra en este terreno. Por lo que otras versiones afirman que el gobierno aprovechó los hechos para acusar a supuestos zapatistas de dicha emboscada para justificar el operativo. Actualmente, varias comunidades de El Bosque se encuentran amenazadas por el grupo paramilitar “Los Plátanos” lo que les ha impedido salir de sus casas. Del mismo modo se encuentran en alerta e inmovilizadas otras comunidades de San Andrés Larráinzar que ha visto aumentar el patrullaje del ejército mexicano.

El sábado 13 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llevó los 8 cadáveres a la comunidad Unión Progreso donde fueron retenidos por mil 500 zapatistas quienes insultaron al Cuarto Visitador en medio de un juicio político y popular, con reclamos sobre las causas de las muertes y la violencia. Más indignación causó en la población al ver la forma en que fueron entregados los cadáveres, en estado de putrefacción, abiertos los vientres y sin ropa lo que generó un llanto y descontento generalizado de la población zapatista. Los indígenas confirmaron que las personas que ahora regresaban muertas fueron llevadas con vida y heridos, lo que les hizo suponer que fueron torturados y después asesinados para entregarlos en estado de descomposición y borrar las huellas de las torturas y balas. Al mismo tiempo, reclaman a compañeros desaparecidos, por lo que se supone más muertos, al igual que se sospecha que las bajas de las fuerzas policiacas fueron más de una, como lo reportaron las autoridades.

El Partido de Acción Nacional (PAN) afirmó que “el clima de violencia que prevalece en Chiapas nos permite afirmar que estamos en presencia de una agresión del gobierno mexicano a comunidades indígenas con el propósito de desatar y resurgir la violencia”; por su lado, el PRD amenaza con salirse del pacto de la Reforma del Estado de continuar con la violencia gubernamental en Chiapas y amenaza también con impulsar un juicio político contra funcionarios responsables de la política represiva en la entidad. Mientras tanto, la COCOPA confirma la posibilidad de suspender su viaje a Chiapas de continuar la violencia en el estado;

pese a esta, se encuentran ya en La Realidad esperando respuesta de la Comandancia del EZLN.

Nuevamente, después de cada golpe y espectaculares represiones, tenemos la visita del presidente Zedillo para bendecirlas. El 12 de junio, dos días después de la matanza en el Bosque, llega por cuarta vez en el año en menos de 40 días. Envío tres mensajes: 1) diálogo directo con el EZLN, 2) desaprobación a la Conai y, 3) respaldar las acciones del gobernador Roberto Albores.

En su cuarta visita al estado, el presidente Zedillo es testigo de la firma del “Acuerdo de Coordinación para la Estabilidad Política, la Reconciliación Comunitaria, el Desarrollo Social y el Crecimiento Económico” entre el gobernador y los 42 municipios más pobres de Chiapas quienes supuestamente se verán beneficiados con un presupuesto de 2 mil 400 millones de pesos, anuncio hecho desde hace semanas y donde las autoridades municipales gobernadas por el PRD no han visto llegar dichos recursos. La “estabilidad política” es entendida como la recuperación del partido oficial en los municipios; la “reconciliación comunitaria” significa para el gobierno la deserción de las bases zapatistas a su beligerancia insurrecta para reconciliarse con la política gubernamental y afiliarse al PRI; el “desarrollo social” es entendida como recursos públicos a los grupos y organizaciones que se adhieren al régimen; y el “crecimiento económico” se entiende como las manos libres para la inversión privada estatal, nacional e inversión extranjera directa.

Esta es la segunda masacre a partir de Acteal en el lapso de seis meses. Esta aleja todavía más las posibilidades de un acercamiento entre el EZLN y el gobierno federal quien ha insistido en un diálogo directo con los insurgentes inmediatamente después de la disolución de la CONAI y de los acontecimientos de El Bosque. Tan solo es prolongar la agonía de la “estrategia de guerra” y del gobernador Roberto Albores. Ante estos acontecimientos, muchas organizaciones sociales comienzan a discutir nuevamente enarbolar la bandera del juicio político al gobernador Roberto Albores o por lo menos su destitución, así como la desaparición de Poderes en Chiapas y nuevas elecciones.

El huevo o la gallina. Si se rompió la tregua o no entre el EZLN y el gobierno federal es un centro de discusión actual. Quizás esta no sea la pregunta central; más bien, si tal tregua existió algún día. En un sentido amplio de la “guerra” podríamos afirmar que no se trata tan solo de la eliminación física del enemigo por medio de la fuerza y las balas, sino también de la muerte de la esperanza, del corazón, de la cultura que revitaliza la vida indígena, de la eutanasia social lenta y paulatina por medio de los cercos de hambre, el terror y el miedo que paraliza, que mantiene a la población indígena en un estado social vegetativo. Estas son las acciones que se encaminan a desplazar a la población, alejarlas de sus medios de sobrevivencia y producción, de empujarlos a las montañas para que el frío, las enfermedades, la desnutrición y la tristeza hagan presa del corazón indígena; de robar sus tiendas, quemar sus milpas, usar sus cocinas como letrinas, de profanar sus cementerios, de prohibirles la libertad de tránsito y de culto al cerrar sus templos y su oración. Esta es la guerra, esta es la estrategia de guerra que se ha implementado desde un principio incluso mientras había diálogo, esta es la supuesta tregua quebrantada por el silencio de los indígenas.

La escalada de violencia aumenta, los acontecimientos indican que efectivamente estamos en una “guerra integral”, donde se ataca por todos lados, en todos los frentes, desde los medios de comunicación, la cultura, la política, la psicología, la educación, la economía local, regional y familiar que elimina hasta el excedente inmediato de bienestar mínimo del indígena con el

robo de su radio, televisión, ropa, enseres domésticos, etc. Por alguna razón el gobierno mexicano se niega a ratificar el Segundo Protocolo de los Convenios de Ginebra referente a los conflictos armados internos para así cortar las mangueras de agua de la comunidad Chavajeval y envenenar los alimentos según los pobladores.

Al tiempo que se asesinan a 8 personas del EZLN y un policía, el Ejército Mexicano realiza un operativo militar contra el EPR en Guerrero donde asesinaron a 11 de sus efectivos en una emboscada. El discurso gubernamental es contradictorio. Sobre el EPR afirma que no habrá diálogo, que son terroristas, que están fuera de la ley, que han asesinado y por ello se justifica su persecución con todo el peso de la ley. Sin embargo, para el gobierno es diferente el EZLN; el discurso gubernamental opta por el diálogo con los zapatistas, que los asiste una ley, que los muertos es tan solo un lamentable suceso fruto de la restauración del estado de derecho, pero la estrategia de guerra y las consecuencias son las mismas aunque los últimos no sean terroristas, y no hayan asesinado a campesinos en acciones militares. En el municipio de Nicolás Ruiz donde por “usos y costumbres” eligieron a sus autoridades, el gobernador Albores los calificó como costumbres “primitivas” lo que ha sido aceptado y ratificado en convenios internacionales y en los Acuerdos de San Andrés; sin embargo, ahora los priístas destituyen al presidente municipal de Mitontic -aledaño a Chenalhó- por “usos y costumbres” ante los grandes fraudes cometidos en la administración municipal, ante esto, el gobernador Albores dijo respetar los “usos y costumbres” por lo que las fuerzas policíacas y militares del municipio no intervinieron.

Así, la “estrategia de guerra” que definiera la CONAI el 7 de junio es otro tema que se debate ahora entre los principales actores sociales y políticos del país. Ante estos acontecimientos vemos que hay tres ejes o ángulos desde donde se discute la legitimidad de las acciones del Ejecutivo implementados por el gobernador interino Roberto Albores:

La ley: los gobiernos federal y estatal manifiestan el total apego a la legalidad para restablecer el estado de derecho en Chiapas como el fundamento básico de su acción. Sin embargo, la implementación de la ley ha sido pretexto para la violación a los derechos humanos; se ha acompañado con supuestas ejecuciones de órdenes de aprehensión incluso pendientes de años atrás y que son ahora aplicadas en los momentos oportunos para el gobierno; van acompañadas de injusticias, represión y operativos policiacos-militares con un promedio de participación de alrededor de mil efectivos fuertemente armados; ha sido pretexto para imponer a las fuerzas priístas de la localidad; ha tenido saldo de muchos presos aunque posteriormente algunos sean liberados junto con 10 de los 26 indígenas miembros del grupo paramilitar “Los Chinchulines”, y de la liberación de Miguel Toporek quien intentara asesinar a la hermana del obispo Samuel Ruiz García en la Curia Diocesana de San Cristóbal en noviembre de 1997; es parcial en el sentido de que es aplicada solo contra aquello que amenaza al partido oficial; etcétera. Por tanto, los laberintos de la “legalidad” para justificar la “legitimidad” y la represión no nos da la lectura adecuada de la realidad, cuando dicha ley es fruto de una correlación de fuerzas que ha sido desfavorable para los pueblos indígenas toda vez que el priísmo se ha impuesto en la orientación legal del estado.

Los discursos: el gobierno federal y estatal han desplegado una campaña impresionante en internet y los medios de comunicación apegados al sistema con el fin de difundir el discurso gubernamental y del presidente Zedillo que tiene las características de ser cínico, contradictorio y con un tono cada vez más beligerante. Con la masacre de los indígenas de El Bosque, indignan las frases que vertidas por el presidente Zedillo como “nunca masacraré a los indígenas”, que no se imponga la violencia “por la fuerza de la costumbre” y hay que

frenarla “antes de que otros se vuelvan insensibles e incluso cínicos frente a su triste repetición”; el Secretario de Gobernación afirmó que “la vida de cualquier mexicano es valiosa”; el gobernador Albores dijo que “ya basta de incertidumbres y de impunidad”. Tampoco el discurso es la medida de la realidad chiapaneca.

Los hechos: los resultados de la “estrategia de guerra” por lo menos en lo que va del año hablan de un aumento de desplazados, muertos, viudas, huérfanos, heridos, presos, operativos policiacos-militares, grupos paramilitares, campamentos militares y policiacos, municipios autónomos desmantelados, sobrevuelos, patrullajes, retenes, paupérrimas condiciones de salud, baja producción, división entre las comunidades, expulsión de extranjeros, ataques a la Diócesis, etc. Hemos hablado mucho sobre algunos de estos indicadores; más adelante hablaremos sobre otros indicadores del empobrecimiento de Chiapas a nivel económico, productivo, educación, salud, entre otros temas. Estos indicadores son la medida de la realidad.

Se han registrado en los últimos días dos grupos paramilitares más bien definidos. Hagamos nuevamente un recuento de ellos hasta el momento: “Paz y Justicia”, “Los Chinchulines”, “Máscara Roja”, “Alianza San Bartolomé de los Llanos” (antes “Fuerzas Armadas del Pueblo”), “Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista” (MIRA), “Los Aguilares”, “Los Puñales”, “Los Tomates”, “Los Chentes”, Frente Cívico de La Independencia y los dos recientes: “Los Quintos” en el municipio de Venustiano Carranza compuesto por al menos 70 paramilitares bien armados, y “Los Plátanos” de El Bosque compuesto por lo menos de 80 jóvenes priistas tzotziles entrenados por el ejército y cuerpos policiacos, según fuentes periodísticas y confirmadas por habitantes de Unión Progreso. Existen cuatro grupos paramilitares que ya no han registrado acciones: “Los Degolladores” en San Juan Chamula, “Tomás Muntzer” en Ocosingo, “Primera Fuerza” en Chenalhó y los “Tzintzines” en Yajalón. Por tanto, ahora suben a 24 municipios de Chiapas donde tienen presencia: Ocosingo, Tila, Tumbalá, Berriozábal, Salto de Agua, Sabanilla, Yajalón, San Fernando, Chilón, Venustiano Carranza, La Independencia, Comitán, Altamirano, San Andrés, Oxchuc, Tenejapa, Chamula, Amatenango del Valle, Chanal, Palenque, Chamula, Las Margaritas, Bochil y El Bosque.

Hay más grupos paramilitares de filiación priista que no se identifican con algún nombre, pero sí con personas en diversas comunidades en por lo menos 20 municipios: Simojovel, Mitontic, Huitiupán, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Chenalhó, Pantelhó, Tenejapa, Sitalá, Palenque, Amatenango de la Frontera, Las Margaritas, Tenejapa, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Chanal, Rayón, La Trinitaria, Tzimol y Socoltenango.

En la medida en que un régimen agota sus posibilidades de generar credibilidad, legitimidad, consenso en la población que supuestamente gobierna, la tendencia es la imposición de su proyecto que se ha alejado de la mayoría del pueblo, desde la violencia, desde la coerción. El partido en el poder sigue viviendo la descomposición interna; en Chiapas, los militantes del partido oficial -PRI- en el municipio de Chicomuselo quemaron urnas en sus pasadas elecciones internas del 7 de junio por los fraudes, la fotocopia de boletas para rellenar urnas, porque las autoridades agrarias condicionaron la entrega de los créditos de PROCAMPO, por el ofrecimiento de 50 mil pesos y láminas por voto, etc. Mientras tanto, en Ocosingo, continúan las inconformidades. Así, el partido oficial prevé la salida de algunos de sus militantes hacia la oposición, quienes han caído en las trampas de sus mismos mecanismos electorales fraudulentos.

Si el gobierno no detiene su “estrategia de guerra” nos acercaremos cada vez más a un proceso de colombianización. Quizá ya no estemos lejos:

“Estamos a 8 días para elegir presidente de la república y ‘está terminando su gestión el presidente Samper y el panorama para el pueblo colombiano no puede ser más oscuro: el Terror del Estado se incrementa, la moto sierra se ha convertido en arma de guerra sucia oficial, el paramilitarismo corta cabezas de miles de compatriotas con la complacencia y aval gubernamental y les usurpa sus tierras lanzando a millones de campesinos al desplazamiento forzoso, como nunca en la historia nacional se aprueba un presupuesto militar que ofende la dignidad del pueblo ahogado por las necesidades y que sufre también, la profunda corrupción de los principales personeros del Estado (...) hemos exigido al gobierno el despeje de 5 municipios y el desmonte del paramilitarismo para sentarnos a la mesa a dialogar con los tres poderes y la sociedad civil y no lo aceptó (...)” (*Comunicado a la opinión pública del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP, Montañas de Colombia, 15 de junio de 1998*).

EL CONTEXTO NACIONAL

Esta masacre de El Bosque y los últimos hechos en Chiapas se dan en el contexto de varios acontecimientos registrados en los últimos días y semanas: la disolución de la Conai; la destitución del gobernador priísta de Morelos, al que se le sigue un juicio político y actualmente dado a la fuga; de los procedimientos de juicios políticos contra los gobernadores priístas de Yucatán y Tabasco; de la iniciativa de los partidos de oposición de prohibir el uso de los colores patrios en los emblemas de los partidos políticos que afectaría obviamente al PRI; de la extradición del el banquero “El Divino” acusado de cuantiosos fraudes bancarios cuya libertad por amparo ha generado mucho escándalo en la opinión pública; de la operación “Casa Blanca” del gobierno estadounidense en territorio mexicano; de una nueva devaluación del peso; de la baja del precio del petróleo; de un posible tercer recorte presupuestal; de un nuevo pacto entre el Legislativo y el Ejecutivo para la Reforma del Estado amenazado ya por el PRD de retirarse ante la violencia en Chiapas; de la discusión sobre si la sociedad mexicana debe asumir la deuda por los vergonzosos fraudes de la banca sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA); del operativo militar contra el EPR en Guerrero donde asesinaron a 11 de sus efectivos en una emboscada y del surgimiento de otra fuerza guerrillera denominada Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el estado de Guerrero.